

Santiago, veinte de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Se sustanciaron estos autos RIT N°O-395-2021, RUC N° 21-4-0316198-2, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulados “ESPINOZA / TAYLOR AUTOMATIZACIÓN S.A.”, en procedimiento de aplicación general sobre indemnización de perjuicios por accidente del trabajo y demanda daño moral.

Por sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, la magistrada doña Carolina Luengo Portilla, hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor en contra de INVERSIONES MAITEN ALTO SPA, declaró que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa del empleador y se le condenó a Resarcir el daño moral causado, fijándose como suma a pagar por tal concepto la cantidad de \$40.000.000. Finalmente, rechazó la demanda respecto de TAYLOR AUTOMATIZACION S.A.

Contra ese fallo la parte demandada Inversiones Maitén Alto Spa, dedujo recurso de nulidad, fundando su arbitrio en dos causales, las que interpone de manera **subsidiaria**; (i) motivo de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haber sido pronunciada con manifiesta infracción de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; (ii) vicio de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por haber sido dictada la sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con el artículo 3° del Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud.

Solicita que se invalide la sentencia impugnada, se dicte una sentencia de reemplazo que acoja la demanda, pero que ordene indemnizar el daño moral que efectivamente habría sufrido el actor conforme al criterio de la experiencia, ordenando pagar a éste cualquier monto razonablemente inferior al que se indica en el fallo recurrido, según esta Corte determine prudencialmente de acuerdo a lo señalado en el Baremo Jurisprudencial.

En subsidio, pide que se invalide la sentencia dictada en autos, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, declarando que, al existir culpa por parte de Taylor Automatización S.A., es ésta la que debe responder por los perjuicios sufridos por el actor; o en subsidio, si se



entiende que hay concurrencia de culpas entre Taylor Automatización S.A. y su parte, que se ordene que ambas deben responder en forma simplemente conjunta de los perjuicios sufridos por el Sr. Espinoza.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.

Considerando:

(i) Motivo de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Primero: La parte demandada funda su recurso de nulidad, por haber sido pronunciada la sentencia con manifiesta infracción de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Señala que, al condenar a su parte al pago de 40 millones de pesos por concepto de daño moral, el tribunal pasó por alto las máximas de la experiencia y, en específico, lo que habían señalado, hasta esa fecha, distintos tribunales laborales, así como Cortes de Apelaciones, en causas similares o equivalentes a la de autos, precisando que en la misma sentencia reconoce el reproche anterior, por cuanto alude a una causa similar en su fallo.

Indica que, mayor abundamiento, de la sentencia citada en la propia sentencia recurrida, revisados casos análogos, concluye que en éstos se condenó a la parte demandada a pagar montos indemnizatorios largamente inferiores al que ordena pagar la sentencia recurrida. Así consta de la revisión de la jurisprudencia laboral expuesta a través del Baremo del Poder Judicial, en materia de indemnizaciones de daño moral por accidente laboral como el relatado en autos, en el que los demandantes tenían entre 25 y 40 años al momento del respectivo accidente, de los que se derivó un grado de incapacidad declarado similar al del actor (35%).

Hace referencia a sentencias en el sentido indicado, afirmando que es claro que el monto de 40 millones de pesos al que fue condenado dista bastante de los montos a los que han sido condenados otros empleadores en situaciones similares, según lo indicado por el mismo baremo jurisprudencial.

En cuanto a la importancia de observar las estadísticas y prácticas judiciales para efectos de establecer el quantum de las indemnizaciones, y



del hecho de que los parámetros fijados por éstas constituyen máximas de la experiencia de las que no se puede apartar el sentenciador, asevera que son temas respecto de los que ya existe un claro pronunciamiento por parte de la jurisprudencia.

Considera que la sentencia impugnada se aparta de aquellos parámetros objetivos para la valoración de los perjuicios patrimoniales, contraviniendo -entonces- las máximas de la experiencia.

Refiere que si la sentencia recurrida entendía que en este caso existían motivos poderosos y especiales para apartarse del Baremo judicial y otorgar una indemnización que excediera dicho Baremo, debió fundamentar dicho razonamiento, cuestión que en este caso no ocurre, al menos no como se habría esperado.

Finalmente indica que el razonamiento seguido por la sentencia influye en lo dispositivo del fallo ya que, si se hubiera aplicado las máximas de la experiencia señaladas, el monto de la indemnización sería sustancialmente menor.

Segundo: Que, para que prospere la causal alegada por el recurrente, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es, evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista.

Además, la causal exige que en el recurso se indique que regla de la sana crítica o máxima de la experiencia, se encuentra infringida, y como se ha producido la referida transgresión.

Tercero: Que, como se puede observar del arbitrio, y en lo que dice en relación a este supuesto, esa condición no concurre en la especie, pues el impugnante se limita a discrepar del fallo, en tanto cuanto a la ponderación de la prueba, cuestionando esencialmente el monto que se ha fijado por el tribunal, vinculando éste a la vulneración alegada al referir que *“la sana crítica, obliga al sentenciador a recurrir a la experiencia judicial y, específicamente, a lo que ésta ha entendido como razonable y justo a la hora de resolver disputas judiciales análogas.”* Estimando de este modo una eventual vulneración del 478 letra b), formulando su propia apreciación de la prueba.



Es decir, el sustento de esta causal se traduce en criticar el raciocinio valórico que hace el sentenciador en el motivo décimo, en el sexto párrafo, al señalar la juez que *“Todo lo anterior ha sido tomado en cuenta por el tribunal para tener por acreditado el padecimiento del actor; tanto por el accidente mismo como por su tratamiento y secuelas físicas, que impresionan porque le fue declarado un 35% de incapacidad, en la cual conforme la propia resolución se consideró además de la fractura, la existencia de Tec leve, cefalea post traumática, trastorno estés post traumático crónico con sistemas residuales, trastorno adaptativo crónico, razones por las cuales se hará lugar al resarcimiento del daño moral que se ha solicitado, el que se avalúa en la suma de \$40.000.000. Esta estimación ha tenido presente el pesar que significa saberse aquejado de una lesión, que lo invalida en su mano derecha (dominante).”* Agregando la sentenciadora de base en el último párrafo del considerando ya referido, *“Que, en tal contexto establecido el dolor y la angustia sufrida por el actor, se otorgará una indemnización por el daño moral ocasionado. En lo tocante al quantum, esta se tuvo en especial consideración el baremo por daño moral ocasionado por accidente del trabajo (<http://baremo.pjud.cl/BAREMOWEB/>), conforme al cual, en caso similar, Rol O-16-2013 del Juzgado de Letras de Lota la condena fue de \$14.800.333.”*

Así las cosas, esta Corte no observa que el juez de base haya infringido alguna máxima de la experiencia, considerando además que el recurrente en su arbitrio no indica ninguna de éstas de manera clara, nítida, sino que tal como se ha mencionado, el tribunal de la instancia hace uso de su facultad privativa de valorar, ponderar la prueba, e indicar un monto en virtud de los fundamentos que expresa en el fallo que se revisa, y que por cierto es una atribución que la ley no le concede al litigante.

Cuarto: Que, en cuanto al segundo requisito, el recurso tampoco lo satisface de manera plena, pues si bien indica que la sentencia infringe las máximas de la experiencia, y específicamente la experiencia judicial, solo se limita a cuestionar y citar alguna jurisprudencia, pero no la desarrolla y menos claro es en cuanto a mencionar como la supuesta vulneración



alegada, ha influido sustantivamente en lo dispositivo del fallo, ya que lo único que realiza el recurrente es un análisis distinto de la sentencia, arribando a conclusiones distintas, pero que no es suficiente para entender justificada una causal de nulidad, en la vulneración alegada, más aún cuando la sentenciadora cita el baremo jurisprudencial, en la propia sentencia que se revisa, por lo cual transforma de manera implícita la naturaleza de derecho estricto del recurso de nulidad a uno de apelación, cuestión que se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico laboral.

Que, consecuentemente, se procede a desestimar la causal de nulidad en comento, por carecer de fundamento.

(ii) En subsidio: vicio de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo.

Quinto: Finalmente, la parte demandada funda su recurso por haber sido dictada la sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con el artículo 3° del Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud.

Estima que yerra la sentenciadora de instancia, toda vez que, al pronunciarse respecto de la responsabilidad que le cabía a Taylor Automatización S.A. en los perjuicios causados al actor, no aplica el artículo antes citado. En efecto, al momento de desechar la acción incoada respecto de Taylor Automatización S.A., se limita a señalar que, a su entender, no se habría configurado un régimen de subcontratación entre dicha empresa y el demandante y que, por tanto, no correspondía aplicar el artículo 183-E del Código del Trabajo; sin embargo, olvida el tribunal de instancia que la obligación en materia de seguridad e higiene que tiene toda empresa respecto de sus dependientes, sean propios o de terceros contratistas, no depende de si se configura o no un régimen de subcontratación, sino que, por el contrario, se trata de un régimen de carácter legal que tiene toda empresa respecto de todas las personas que se desempeñan físicamente en sus faenas, sean trabajadores propios o de terceros.

Sostiene que en la sentencia no se aplica el artículo 3° del DS 594 del Ministerio de Salud, en circunstancias que éste había sido invocado por el



actor en su demanda para fundar la responsabilidad de Taylor Automatización S.A.

Asevera que, si se hubiera aplicado la norma infraccionada, se habría determinado que a Taylor Automatización S.A. le cabe responsabilidad directa por los daños sufridos por el actor, en su calidad de titular del inmueble en el que se produjo el accidente, bajo su control y supervisión.

Precisa que, según la misma sentencia, que recoge lo señalado en el informe pericial, el accidente del Sr. Espinoza consistió en que éste “(...) *sube al techo para avanzar con la limpieza del mismo con hidro lavadora. Mientras camina por el techo pisa por error tragaluz de policarbonato translucido ondulado y cae al suelo desde una altura aproximada de 4 metros*”. Asimismo, el Sr. Carlos Marchant, en su declaración (recogida en la sentencia), indicó que “*el accidente 13:30, antes lavando el techo, estaba nervioso el techo no estaba firme, dijeron que estaba endeble y les pasaron unos tablones para pisar, los mismos trabajadores de esa empresa (los del galpón)*”.

Señala que, en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, en el que se analiza la dinámica del accidente, deja en claro que, al menos parcialmente, éste se debe a la culpa de Taylor Automatización S.A.

Refiere que el accidente no solo se produjo en las dependencias de Taylor, sino que se produjo, específicamente, porque la techumbre donde se encontraba prestando servicios el Sr. Espinoza se encontraba en mal estado.

Dicho de otra forma, considera que el accidente se origina en el mal estado de las dependencias de Taylor Automatización S.A., con perfecto conocimiento de ésta de dicho mal estado, pese a lo cual dicha empresa no detuvo las labores que desarrollaba el actor, sino que -por el contrario- ofreció una solución completamente insuficiente a dicho problema (*entregar tablones para pisar sobre el techo endeble*).

Argumenta que de haberse considerado y aplicado el artículo 3° del DS 594 del Ministerio de Salud, necesariamente se habría concluido que Taylor Automatización es responsable de los perjuicios causados al Sr. Espinoza, pues la obligación de mantener las condiciones sanitarias y ambientales en el lugar de trabajo para proteger la vida y salud de todos



quienes allí presten servicios (sean trabajadores directos o de terceros) les es vinculante, se configure o no un régimen de subcontratación. En otras palabras, Taylor Automatización debía velar por la seguridad del Sr. Espinoza, fuesen o no esporádicos sus servicios.

Concluye que el accidente en cuestión ocurrió, al menos en parte, como consecuencia del grave incumplimiento de Taylor Automatización S.A. a la citada obligación legal, de forma que debe responder por los perjuicios causados al señor Espinoza.

Sexto: Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el sentido, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se han tenido por probados.

Séptimo: Que, desde este punto de vista lo que se hace a través de la infracción de ley como causal de nulidad, es la confrontación de la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone la fidelidad a los hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de examinar es si las conclusiones fácticas encuadran en el supuesto legal respectivo. En definitiva, para poder revisar el juzgamiento jurídico del caso resulta menester que los hechos a partir de los que se estructura la impugnación se encuentren fijados en la sentencia –los que son inamovibles– pues sólo de cumplirse tal exigencia se podrá generar el debate sobre la infracción de ley que se denuncia.

Octavo: Que, tal como se ha indicado en reiteradas ocasiones, se hace necesario, por el recurrente indicar la infracción de ley alegada, cuestión que en el caso de marras no ocurre, ya que, no se indica ninguna disposición del Código del Trabajo que haya sido vulnerada por el sentenciador, considerando además que el arbitrio se limita a expresar que la sentenciadora de base habría infringido una disposición de rango reglamentario, la cual se encuentra en un decreto supremo, en virtud del cual se aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, es decir, una norma de menor entidad a la



que exige el legislador laboral, para que pueda prosperar el recurso de nulidad que como bien sabemos es de derecho estricto, y que como se ha indicado no se ha vinculado con ninguna norma de rango legal y menos que ésta se ubique dentro de la legislación laboral, motivo por el cual se ha desestimar la causal de nulidad que ha impetrado el recurrente.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza sin costas**, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada, en contra de la sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en causa RIT O-395-2021, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Acordada, en lo que a la condena en costas se refiere, con el voto en contra del Ministro Mario D. Rojas González, quien estuvo por imponerlas a la parte recurrente, por estimar que ha litigado, en lo referente al recurso, sin tener motivo plausible para ello.

Regístrese y comuníquese.

Redactor ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

No firma el ministro señor Rojas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Nº Laboral-Cobranza 3340-2022.



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. Santiago, veinte de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinte de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

